

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2341-2023
CARATULADO : SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E
INTÉRPRETES MUSICALES/ESPACIO SAN CRISTOBAL Y LAGARRIGUE
SPA

Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

A folio 1, con fecha 13 de febrero de 2023, comparece don Hugo Soto Bustos, abogado, domiciliado en Bernarda Morín N°435, Providencia, Santiago, en representación de **SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES, SCD**, entidad de gestión colectiva de derechos intelectuales, representada por su Director General don Juan Antonio Durán González, ingeniero civil, ambos domiciliados en Condell N°346, Providencia, Santiago, quien viene en interponer demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, en procedimiento sumario, en contra de **ESPACIO SAN CRISTÓBAL Y LAGARRIGUE SPA**, de giro de explotación de discoteques, restaurantes y bares, representada legalmente por doña María Teresa García Urbina, comerciante, domiciliadas en Ernesto Pinto Lagarrigue N° 154, Recoleta.

El demandante argumenta que la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, anteriormente denominada Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, es una entidad de gestión colectiva autorizada por las Resoluciones N°s. 3.891 y 2.608 del Ministerio de Educación, publicadas en el Diario Oficial con fechas 10 de octubre de 1992 y 23 de junio de 1994, respectivamente, conforme a lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes de la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

En virtud de dicha autorización, sostiene que la SCD se encuentra facultada para administrar, en forma colectiva, los derechos de autor y derechos conexos de los titulares que representa, tanto nacionales como



Foja: 1

extranjeros, respecto del derecho de comunicación pública de obras musicales, sean estas con o sin texto, sincronizadas o no en producciones audiovisuales, teatrales y coreográficas, que forman parte del repertorio que mantiene en el Registro Público previsto en el artículo 102 de la ley citada.

Expone que Espacio San Cristóbal y Lagarrigue SpA, sociedad dedicada, entre otras actividades, a la explotación de discoteques, bares y restaurantes, representada por doña María Teresa García Urbina, suscribió con la SCD, en fecha 22 de abril de 2019, el Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública B-N° 133916, mediante el cual obtuvo autorización para ejecutar públicamente obras musicales del repertorio administrado por la entidad demandante, en el local denominado “Espacio San Cristóbal”, ubicado en calle Ernesto Pinto Lagarrigue N° 154, comuna de Recoleta.

Manifiesta que, conforme a dicho contrato, el demandado se obligó a pagar, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a su devengo, una tarifa mensual equivalente al 3% de los ingresos brutos del negocio, excluido el IVA, según lo previsto en la cláusula undécima del instrumento contractual. Agrega, que dicha tarifa se encuentra establecida en las Tarifas Generales de la SCD, dictadas conforme al artículo 100 de la Ley N°17.336, y publicadas en el Diario Oficial los días 13 de febrero y 27 de octubre de 1993, siendo aplicables específicamente los Títulos II, N° 15 y III, en concordancia con el artículo 2° transitorio de la Ley N°19.166 y el artículo 4° letra a) del Reglamento de Arancel contenido en el Decreto Universitario N°13.056.

Refiere que, no obstante lo anterior, la sociedad demandada no ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas, específicamente al pago de la tarifa convenida, desde el 1° de abril de 2019, circunstancia que motiva la interposición de demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, solicitando se condene a la parte demandada al pago de las sumas adeudadas por dicho concepto, correspondientes al período comprendido entre abril de 2019 y febrero de 2023, así como aquellas que se devenguen desde el 1° de marzo de 2023 hasta el término del juicio.

Añade que, en virtud de lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato suscrito entre las partes, corresponde además que el demandado



Foja: 1

pague a la SCD, a título de evaluación anticipada de perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones no reajustables, aplicable desde el undécimo día del mes siguiente a cada mes adeudado hasta su pago efectivo.

Finalmente, solicita que se condene al demandado al pago de la multa máxima establecida en el artículo 78 de la Ley N°17.336, por cuanto el incumplimiento en el pago de la remuneración pactada constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 21 y 67 del mismo cuerpo legal.

En razón de lo anterior, solicita que se condene a la demandada:

1) A pagar a su representada la tarifa mensual pactada en el Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública B-N° 133916, del 3% de los ingresos brutos mensuales del negocio, con la sola deducción del IVA, respecto del período comprendido entre abril de 2019 a febrero de 2023.

2) A cancelar a su representada la tarifa mensual indicada en el número precedente, por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2023 en adelante y hasta el término del juicio.

3) A título de indemnización de perjuicios, el interés corriente bancario para operaciones no reajustables, contado desde el undécimo día del mes siguiente a cada período mensual adeudado hasta su pago efectivo.

4) A pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, prevista en el artículo 78 de la Ley N° 17.336, o la que este Tribunal se sirva fijar.

5) Sin perjuicio de lo anterior, en subsidio, y de acuerdo al mérito del proceso, a lo que este Tribunal se sirva determinar, conforme a derecho.

6) Todo lo anteriormente demandado según los montos que se liquiden en la etapa del cumplimiento del fallo o, a expresa solicitud de su parte, en la etapa procesal pertinente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 85 K de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

7) Al pago de las costas de la causa.

A folio 7, con fecha 24 de febrero de 2023, consta **notificación personal subsidiaria** a la demandada, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 10, con fecha 16 de marzo de 2023, se celebró **audiencia de contestación y conciliación**, con la comparecencia de los representantes de



Foja: 1

ambas partes. En dicha oportunidad, se tuvo por opuesto incidente de previo y especial pronunciamiento, y excepción dilatoria, por parte de la demandada, de conformidad con el primer y segundo otrosí de la minuta rolante a folio 9 del expediente electrónico.

En primer lugar, el demandado promovió, en el primer otrosí de su escrito de contestación, un **incidente de previo y especial pronunciamiento**, fundado en la causal de ineptitud del libelo de demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 303, regla cuarta, del Código de Procedimiento Civil. Manifestó que la demanda no cumple con el requisito establecido en el artículo 254 N° 4 del referido cuerpo legal, que exige una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la acción. Refiere que el libelo se limita a señalar la existencia de un contrato entre su representada y la parte demandante, en virtud del cual se habría autorizado la ejecución pública de obras musicales, y que, derivado de dicho acto, su parte habría contraído la obligación de pagar un porcentaje de sus ingresos. No obstante, afirma que no se describe con claridad ni precisión alguna las condiciones en que se habría adquirido dicha obligación, tales como la oportunidad, el monto exacto, el lugar del pago, o demás circunstancias relevantes.

Asevera que esta vaguedad en la exposición fáctica se ve agravada por la omisión de acompañar el contrato al que la demanda hace referencia, lo que impide a su parte tener una noción clara y suficiente para ejercer debidamente su derecho a defensa, derecho que —sostiene— constituye un elemento esencial del debido proceso.

Argumenta que, para que una demanda pueda ser comprendida y permitir una defensa adecuada, resulta imprescindible que se expongan con detalle los hechos que configuran la fuente de la obligación cuyo cumplimiento se demanda, o que, en su defecto, se acompañe el documento fundante de tal obligación, más aún cuando se trata de un contrato que, según lo dispuesto en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, debe constar por escrito.

Añade que la deficiente exposición de los hechos por parte del actor impide entender con precisión los incumplimientos que se le atribuyen a su representada, lo que podría mitigarse si constara en autos el contrato



Foja: 1

aludido. Sin embargo, reitera que la omisión de dicho documento redundará en una afectación directa al ejercicio de su derecho de defensa, por cuanto impide comprender cabalmente la demanda deducida en su contra.

En mérito de lo anterior, solicitó tener por interpuesto el incidente de previo y especial pronunciamiento de ineptitud del libelo, que se le dé la tramitación correspondiente, y que, en definitiva, se acoja, con expresa condenación en costas.

En segundo lugar, el demandado opuso, en subsidio de lo solicitado en el primer otrosí, **excepción dilatoria** fundada en la causal establecida en la regla cuarta del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en la forma de proponer la demanda.

Argumenta que el artículo 254 del citado cuerpo legal establece los requisitos mínimos que debe contener toda demanda, señalando en su numeral cuarto que esta debe contener *“la exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya”*. Sostiene que el libelo de la parte demandante no cumple con este requisito, pues se limita a indicar que su representada habría suscrito un contrato que la habilitaba para ejecutar públicamente obras musicales del repertorio gestionado por la actora, y que, derivado de dicha autorización, se habría obligado al pago de un porcentaje de sus ingresos.

Indica que, no obstante lo anterior, la demanda omite relatar circunstancias fundamentales de la obligación cuyo cumplimiento se persigue, como son el modo de adquisición de dicha obligación, la oportunidad en que debía cumplirse, el monto preciso, el lugar de pago, y otras condiciones esenciales, todo lo cual impide comprender con claridad el contenido y alcance de los hechos en que se sustenta la acción.

Recalca que esta deficiencia se ve agravada por la circunstancia de que el contrato aludido en la demanda no fue acompañado al escrito inicial, lo que priva a su parte de un conocimiento adecuado de los términos contractuales cuya supuesta infracción se le imputa, afectando de forma directa su derecho a defensa, principio que —afirma— constituye un componente esencial del debido proceso.



Foja: 1

Aduce que, conforme a los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, tratándose de un contrato que debe constar por escrito, como lo sería el invocado por la actora, resulta imprescindible que dicho instrumento se acompañe al inicio del proceso, o al menos se contengan con precisión sus estipulaciones esenciales, lo que no ha ocurrido en la especie.

Sobre esa base, solicita que se tenga por interpuesta la excepción dilatoria de ineptitud del libelo, en subsidio de lo solicitado en el primer otrosí, que se le dé la tramitación correspondiente, y que, en definitiva, se acoja con expresa condenación en costas.

Acto seguido, conferido traslado respecto del incidente como de las excepciones, la parte demandante solicitó reservarse el plazo para evacuarlo, suspendiéndose la audiencia.

A folio 12, con fecha 20 de marzo de 2023, la parte demandante **evacuó** tanto **el traslado** conferido respecto al incidente de previo y especial pronunciamiento como de la excepción dilatoria, solicitando el rechazo de ambas, con costas.

En lo principal de la presentación, el demandante evacuó el traslado conferido en audiencia de 16 de marzo de 2023 respecto del **incidente de previo y especial pronunciamiento** deducido por la parte demandada, señalando, en primer término, que dicho incidente constituye en realidad una excepción dilatoria formulada bajo la apariencia de incidente, careciendo además de fundamento jurídico y fáctico, toda vez que la demanda satisface los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en particular, su numeral cuarto.

Afirma que el libelo cumple con exponer con claridad los hechos que configuran la responsabilidad contractual de la demandada, desglosándolos en tres elementos: primero, la existencia del contrato entre las partes, individualizado como “Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública para la Utilización del Repertorio de SCD de Obras y Fonogramas Musicales en Discotheques, Boites, Cabaret y Otros Establecimientos Similares B-Nº 133916”, celebrado el 22 de abril de 2019; segundo, las obligaciones asumidas por la demandada, específicamente el pago de una tarifa mensual del 3% de los ingresos brutos del local, excluido



Foja: 1

el IVA, dentro de los diez primeros días del mes siguiente; y tercero, el incumplimiento de dichas obligaciones desde abril de 2019.

Hace presente que la claridad del libelo permitió a la demandada contestar la demanda y pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que, a su juicio, refuerza la improcedencia del incidente de previo y especial pronunciamiento.

Por tanto, solicita el rechazo del incidente en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En el primer otrosí, evacuó el traslado de la **excepción dilatoria** interpuesta por la demandada, formulada también bajo la causal de ineptitud del libelo, haciendo presente que se funda en los mismos argumentos expuestos en el incidente principal, los que da íntegramente por reproducidos.

Añade que la única alegación nueva contenida en la excepción dilatoria consiste en la supuesta omisión de acompañar el documento fundante de la acción. Frente a ello, sostiene que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 18.705, de 24 de mayo de 1988, ya no es obligatorio presentar la demanda junto con los documentos fundantes, por haber sido derogado el inciso primero del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Señala que, actualmente, dicho precepto regula únicamente la oportunidad procesal para acompañar documentos, lo que refuta el supuesto defecto alegado por la parte contraria.

En mérito de lo anterior, solicitó el rechazo de la excepción dilatoria en todas sus partes, con costas.

A folio 13, con fecha 22 de marzo de 2023, **se tuvo por evacuado el traslado** conferido al demandante respecto del incidente de previo y especial pronunciamiento y de la excepción dilatoria opuesta, dejándose su resolución para sentencia definitiva, conforme lo preceptuado por el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 14, con fecha 23 de marzo de 2023, se celebra la **continuación del comparendo de contestación y conciliación**, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes. En dicha oportunidad, las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión del procedimiento por el término de treinta días, a lo cual el tribunal accedió.



Foja: 1

A folio 18, con fecha 20 de junio de 2023, levantada la suspensión del procedimiento, se celebró la **continuación del comparendo de contestación y conciliación**, con la comparecencia de los apoderados de ambas partes.

En la audiencia, el demandado **contestó la demanda** a través de minuta escrita rolante a folio 9, sosteniendo, en subsidio del incidente de previo y especial pronunciamiento y de la excepción dilatoria opuesta, que la demanda interpuesta debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Niega adeudar suma alguna a la parte demandante, afirmando que el cobro impetrado se basa en un contrato cuyas cláusulas no le constan, y que no ha sido acompañado al proceso, lo que impide conocer con claridad el contenido de las obligaciones supuestamente contraídas. Señala que los montos reclamados corresponderían a un período que se extiende desde abril de 2019 hasta febrero de 2023 y desde marzo de 2023 hasta el término del juicio, sin que se haya acreditado debidamente la procedencia de tales cobros.

Aduce que, para que la obligación reclamada sea exigible, debió haberse constatado la utilización efectiva del repertorio administrado por la actora en el local de su representada, ubicado en calle Ernesto Pinto Lagarrigue N° 154, comuna de Recoleta. No obstante, afirma que durante la totalidad del período comprendido en la demanda, dicho establecimiento no se encontró abierto al público, por lo que no habría existido ejecución pública alguna de obras protegidas, circunstancia que excluye toda posibilidad de que su parte adeude remuneración por dicho concepto.

Afirma que, en conformidad con lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde al actor probar la existencia de la obligación cuya ejecución se pretende, así como también los elementos que configuren su procedencia. Añade que, según el artículo 1437 del mismo cuerpo legal, toda obligación debe tener una fuente legal, contractual o cuasicontractual determinada, lo que en la especie no ha sido suficientemente acreditado.

Esgrime que el contrato en el que se funda la demanda, de conformidad con los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, debe constar por escrito, lo que no se verifica en autos, ya que la demandante no ha



Foja: 1

acompañado el documento que contendría la convención supuestamente celebrada entre las partes, infringiendo las exigencias legales en materia de prueba de los actos jurídicos.

Finalmente, respecto de la solicitud de aplicación de multa formulada por la parte demandante con fundamento en el artículo 78 de la Ley N°17.336, alega que dicha sanción posee naturaleza punitiva, por lo que no correspondería que sea impuesta por un tribunal civil, toda vez que este carecería de competencia para su aplicación.

En mérito de lo anterior, solicita el rechazo íntegro de la demanda, con expresa condenación en costas.

Acto seguido, **se llama a las partes a conciliación**, la cual no se produjo, poniéndose término a la audiencia.

A folio 21, con fecha 06 de julio de 2023, se **recibió la causa a prueba**, rindiéndose la que obra en autos.

A folio 68, con fecha 10 de marzo de 2025, se **citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

En cuanto al incidente de previo y especial pronunciamiento

PRIMERO: Que, la parte demandada ha promovido, por la vía del primer otrosí de su escrito de contestación, un incidente de previo y especial pronunciamiento fundado en la causal de ineptitud del libelo, conforme a lo dispuesto en la regla cuarta del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que la demanda no cumpliría con el requisito previsto en el artículo 254 N° 4 del mismo cuerpo legal, al no exponer con claridad los hechos ni fundamentos de derecho que sustentarían la acción. Alega, en particular, que el libelo carecería de precisión respecto de las condiciones de la obligación cuyo cumplimiento se demanda —como su oportunidad, monto, lugar de pago y demás circunstancias esenciales—, y que esta deficiencia se vería agravada por la omisión de acompañar el contrato fundante de la acción, lo que impediría a su parte ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

SEGUNDO: Que, evacuando el traslado conferido, la parte demandante se opuso al incidente de previo y especial pronunciamiento promovido por la contraria, alegando que lo planteado constituye en



Foja: 1

realidad una excepción dilatoria formulada bajo la apariencia de un incidente, careciendo de sustento jurídico y fáctico, por cuanto el libelo de demanda cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, especialmente en su numeral cuarto. Sostuvo que en la demanda se expone con claridad los hechos que fundamentan la responsabilidad contractual del demandado, identificando expresamente el contrato celebrado entre las partes el 22 de abril de 2019, las obligaciones de pago asumidas por la demandada, y el incumplimiento alegado desde abril de 2019. Añade, que la suficiencia del libelo queda demostrada por el hecho de que la demandada pudo contestar la demanda y pronunciarse sobre el fondo, solicitando en definitiva el rechazo íntegro del incidente, con costas.

TERCERO: Que, del examen de los antecedentes, aparece con claridad que el incidente de previo y especial pronunciamiento promovido por la parte demandada se funda en la causal de ineptitud del libelo de demanda, esto es, en la alegación de que el escrito inicial carecería de una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, conforme a lo exigido por el artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, dicha alegación constituye una típica excepción dilatoria, la cual, de acuerdo al artículo 303 N° 4 del mismo cuerpo legal, debe ser planteada expresamente por esa vía y no mediante un incidente. En consecuencia, al haberse articulado por un medio procesal improcedente, no corresponde que el incidente de previo y especial pronunciamiento sea acogido, motivo por el cual habrá de ser desestimado, tal como se declarará en lo resolutive de esta sentencia.

En cuanto a la excepción dilatoria

CUARTO: Que, en subsidio del incidente anteriormente analizado, la parte demandada opuso excepción dilatoria fundada en la causal de ineptitud del libelo, prevista en la regla cuarta del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la demanda no cumpliría con el requisito del artículo 254 N° 4 del mismo cuerpo legal, al no contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la acción.

En particular, sostiene que el libelo se limita a afirmar la existencia de



Foja: 1

un contrato sin describir adecuadamente las condiciones de la obligación cuyo cumplimiento se exige, tales como su oportunidad, monto, lugar de pago y otras circunstancias esenciales. Añade que la omisión del contrato en que se funda la acción impide conocer los términos de la supuesta obligación, afectando el derecho a defensa de su parte, máxime tratándose de un contrato que, conforme a los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, debe constar por escrito, solicitando en definitiva que se acoja la excepción, con costas.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandante evacuó el traslado conferido solicitando el rechazo de la excepción dilatoria opuesta, señalando que esta se sustenta en los mismos argumentos ya expuestos en el incidente de previo y especial pronunciamiento, los cuales da por reproducidos. Agrega que la única alegación adicional consiste en la supuesta omisión de acompañar el contrato fundante de la acción, respecto de lo cual sostiene que, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 18.705, ya no es exigible presentar la demanda conjuntamente con los documentos fundantes, por haberse derogado el inciso primero del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, norma que actualmente solo regula la oportunidad procesal para acompañarlos, motivo por el cual solicita el rechazo de la excepción en todas sus partes, con costas.

SEXTO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, la demanda debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. En la especie, el libelo de la parte demandante satisface dicho requisito, al describir de manera ordenada y comprensible los antecedentes fácticos que sustentan la acción, tales como la existencia del contrato celebrado entre las partes, las obligaciones asumidas por la demandada y su incumplimiento, así como también los fundamentos jurídicos que respaldan sus pretensiones.

Por su parte, los reproches formulados por la demandada relativos a la falta de detalle sobre determinadas condiciones de la obligación, como su oportunidad, monto o lugar de cumplimiento, no constituyen vicios formales que afecten la inteligibilidad del libelo, sino cuestiones de hecho que deberán ser objeto de prueba. En el mismo sentido, la falta de



Foja: 1

acompañamiento del contrato aludido no obsta a la validez formal de la demanda, constituyendo igualmente una cuestión de prueba cuya valoración corresponde a una etapa posterior del proceso.

En consecuencia, no se advierte la concurrencia de vicio alguno que impida el adecuado conocimiento de la acción intentada, razón por la cual la excepción de ineptitud del libelo será rechazada.

En cuanto al fondo del asunto

SÉPTIMO: Que, la **SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES, SCD** interpuso demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, en procedimiento sumario, en contra de **ESPACIO SAN CRISTÓBAL Y LAGARRIGUE SPA**, todos ya individualizados, en mérito de los argumentos reseñados en la parte expositiva de este fallo, los que se tienen por reproducidos.

OCTAVO: Que, estando legalmente emplazada, la demandada contestó la demanda solicitando su completo rechazo, conforme los argumentos ya expuestos, los que también se tienen por reproducidos.

NOVENO: Que, para acreditar los fundamentos de su pretensión, y en lo que interesa, la parte demandante, acompañó la siguiente prueba:

A) Documental

A folio 1:

1.- Reducción a escritura pública de acta de asamblea general extraordinaria de socios de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes musicales, de fecha 17 de abril de 2019, ante don Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, repertorio N°21422.

2.- Protocolización de fotocopia de Resolución Exenta N°4519, de fecha 08 de agosto de 2017, del Ministerio de Educación, que modifica la Resolución Exenta N°3891 de 1992, del Ministerio de Educación, que autoriza a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) para realizar actividades de gestión colectiva de derechos intelectuales, ante don Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, repertorio N°49188.

3.- Protocolización de Resolución Exenta N°2608, de fecha 30 de mayo de 1994, del Ministerio de Educación, que declara que la Sociedad



Foja: 1

Chilena del Derecho de Autor (SCD) ha cumplido con lo establecido en el artículo 93 E inciso tercero del artículo tercero transitorio de la Ley N°19.166, ante don Víctor Manuel Correa Valenzuela, Notario Público Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago.

A folio 19:

4.- Copia de Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública para la Utilización del repertorio de SCD de Obras y Fonogramas Musicales en Discotheques, Boites, Cabaret y Otros Establecimientos Similares, B N°133916, de fecha 22 de abril de 2019.

A folio 25:

5.- Copia de la sentencia de la Corte Suprema pronunciada con fecha 29 de octubre de 2003, en causa rol N°2837-02.

6.- Copia de la sentencia de reemplazo pronunciada por la Corte Suprema, con fecha 29 de octubre de 2003, en causa rol N°2837-02.

7.- Copia de sentencia pronunciada en causa rol N°3768-2003, con fecha 14 de julio de 2008, no consta Tribunal.

8.- Copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones, no consta jurisdicción, pronunciada con fecha 27 de junio de 2008, en causa rol N°1166-2005.

9.- Copia de sentencia pronunciada en causa rol N°1144-03, con fecha 25 de enero de 2005, no consta Tribunal.

B) Exhibición

A folio 63:

10.- 57 Declaraciones mensuales y pago simultáneo de impuestos formulario 29, presentados por Espacio San Cristóbal y Lagarrigue SpA al Servicio de Impuestos Internos, entre el 12 de junio de 2019 y el 03 de abril de 2024, acompañadas al expediente electrónico por orden folio 31, que accedió a la solicitud de exhibición de folio 26.

A folio 64:

11.- 51 Declaraciones Libros de Venta de Espacio San Cristóbal y Lagarrigue SpA, de los meses comprendidos entre abril de 2019 a diciembre de 2023, acompañadas al expediente electrónico por orden folio 31, que accedió a la solicitud de exhibición de folio 26.



Foja: 1

DÉCIMO: Que, por su parte, para acreditar los hechos que sustentan sus excepciones y defensas, la parte demandada produjo la siguiente prueba en autos:

A) Documental

A folio 28:

1.- Contrato de arriendo celebrado con fecha 10 de marzo de 2022 entre Eduardo Roberto Millar Fuentes y Espacio San Cristóbal Lagarrigue SpA sobre el inmueble ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue N°154, Rol 284-99, ciudad de Santiago, que funciona amparado por las patentes de alcohol y comercial Rol 2-743270 y Rol 4-511355 Letra I respectivamente, otorgadas por la Ilustre Municipalidad de Recoleta.

2.- Resolución de número parcialmente ilegible emanada de la Ilustre Municipalidad de Recoleta de fecha 5 de marzo de 2019 que autoriza el arriendo a Inversiones E Inmobiliaria Príncipe Limitada a dar en arriendo la patente Alcohol Rol 4-511355 de giro restaurant de Turismo y la patente comercial Rol 2-743270 a Espacio San Cristóbal y Lagarrigue SpA.

3.- Orden de ingreso municipal N°1986864, extendido por la Municipalidad de Recoleta respecto de Inversiones e Inmobiliaria Príncipe.

4.- Resolución N°212 exenta de fecha 27 de marzo 2020, publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de marzo de 2020.

5.- Publicación aparecida en www.achiga.cl el 20 de marzo de 2020, titulada “Coronavirus: gobierno decreta el cierre total de restaurantes, bares, discotecas y cines indefinidamente”.

6.- Publicación aparecida en www.minsal.cl el 20 de marzo de 2020, titulada “Gobierno anunció cierre de cines, restaurantes y actividades deportivas”.

A folio 65:

7.- Carta de fecha 01 de diciembre de 2023, “Ref. Comunica término de contrato”, remitida por doña María Teresa Urbina a Sociedad Chilena del Derecho de Autor.

8.- Formulario de admisión de Correos de Chile, servicio carta certificada, de fecha 01 de diciembre de 2023, destinatario Sociedad Chilena del Derecho de Autor.



Foja: 1

B) Testimonial

A folio 34:

9.- Declaración de la testigo doña Romina Paz Polla Cortez, sin tachas. 10.- Declaración del testigo don Pablo Andrés Cornejo Jeldres, sin tachas.

UNDÉCIMO: Que, la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de una obra, adquieren sus autores en los ámbitos literario, artístico y científico, cualquiera sea su forma de expresión, así como también los derechos conexos que ella contempla, conforme lo dispone su artículo 1°.

Asimismo, dicha ley establece que el derecho patrimonial confiere a su titular la facultad de utilizar directamente la obra, de transferir sus derechos sobre ella, total o parcialmente, y de autorizar su utilización por terceros; disponiendo expresamente que sólo el titular del derecho de autor, o quien se encuentre expresamente autorizado por él, puede hacer uso de la obra, ya sea mediante su publicación, reproducción o ejecución pública, a través de cualquier medio, incluido radio, televisión, discos fonográficos, películas, cintas magnetofónicas, u otros soportes materiales aptos para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido o imagen, o por cualquier otro medio técnico idóneo, conforme a lo previsto en los artículos 17 y 18 del referido cuerpo legal.

DUODÉCIMO: Que, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley N°17.336 “*Tod[a] (...) persona que tenga en explotación cualquier sala (...) en que se representen o ejecuten obras teatrales, cinematográficas o piezas musicales, o fonogramas o videogramas que contengan tales obras, de autores nacionales o extranjeros, podrá obtener la autorización de que tratan los artículos anteriores a través de la entidad de gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no exclusiva; y estará obligado al pago de la remuneración que en ella se determine, de acuerdo con las normas del título V*”. En tal sentido, un particular que desee la reproducción de obras fonográficas o musicales, en el caso concreto, deberá obtener la licencia mediante un contrato de autorización de ejecución pública de obra musical, como ocurrió en autos, debiendo percibir la sociedad contratante la justa remuneración por la reproducción de obras



Foja: 1
licenciadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, por su parte, conforme al artículo 91 de la Ley N° 17.336, la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos sólo puede ser ejercida por entidades expresamente autorizadas en conformidad al procedimiento previsto en el Título V del referido cuerpo legal. En este contexto, los documentos individualizados en los números 1 y 2 del considerando noveno, valorados conforme lo dispuesto por los artículos 342 N°6 del Código de Procedimiento Civil y 1700 del Código Civil, acreditan que la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, cuenta con la autorización correspondiente para actuar como entidad de gestión colectiva, encontrándose, por tanto, debidamente legitimada para ejercer la presente acción judicial.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta manera y conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, correspondía, por una parte, a la demandante acreditar la existencia de la relación contractual, lo que se ha logrado en virtud del contrato de autorización de comunicación o ejecución pública para la utilización del repertorio de SCD de obras y fonogramas musicales en discotheques, boites, cabaret y otros establecimientos similares B N°133916, de fecha 22 de abril de 2019, acompañado en fotocopia autorizada de instrumento privado valorado según su naturaleza y de conformidad a la regla tercera del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

De dicho contrato se desprende que, conforme sus cláusulas primera y tercera, el demandado explotaba comercialmente el local ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue N°154, de la comuna de Recoleta, denominado “Espacio San Cristóbal”, del giro Discotheques, código 151262, en el que se comunicaría y ejecutaría públicamente obras musicales y fonogramas del repertorio de SCD a cambio de un pago mensual, durante la vigencia del contrato, del 3.00% de los ingresos brutos mensuales del negocio, con la sola deducción del IVA, que resultaba de la aplicación de las tarifas establecidas en el N°15 del Título II y Título III de las Tarifas Generales de SCD, publicadas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N°17.336, sumas que debía pagar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente.



Foja: 1

DÉCIMO QUINTO: Que, conforme a las reglas generales en materia de carga probatoria, correspondía a la parte demandada acreditar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la demandante, específicamente en lo referido al pago de las retribuciones pactadas por el uso del repertorio musical durante el período comprendido entre abril de 2019 y febrero de 2023, así como desde el 1 de marzo de 2023 en adelante. Sin embargo, la demandada no rindió prueba alguna destinada a acreditar el pago de dichas sumas, no desvirtuando así la pretensión principal de la actora.

No obstante lo anterior, la demandada acompañó los documentos identificados bajo los numerales 7) y 8) del considerando décimo –los que serán valorados conforme su naturaleza- consistentes en una carta certificada y su comprobante de envío, remitida por su representante legal, doña María Teresa García Urbina, a la parte demandante con fecha 1 de diciembre de 2023, mediante la cual manifestó su voluntad de poner término al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula octava del mismo, que establecía su vigencia anual con renovación tácita, salvo manifestación expresa de voluntad en contrario con al menos treinta días de anticipación al 31 de diciembre de cada año.

En consecuencia, no habiendo acreditado la demandada el pago de las sumas reclamadas, pero sí habiendo acreditado que el contrato terminó el 31 de diciembre de 2023, es que deberá ser condenada al pago de las retribuciones que se hubieren devengado entre abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto al monto de la indemnización, la parte demandante ha solicitado se condene al pago de la tarifa pactada en el contrato, equivalente al 3,00% de los ingresos brutos mensuales del negocio, con la sola deducción del IVA. Para tales efectos, instó a la exhibición por parte de la demandada de las Declaraciones Mensuales y Pago Simultáneo de Impuestos (Formulario 29), así como de los Libros de Venta de Espacio San Cristóbal y Lagarrigue SpA, documentos que fueron acompañados a folios 63 y 64, respectivamente, y que se encuentran identificados bajo los numerales 10) y 11) del considerando noveno. Dichos antecedentes, valorados conforme su naturaleza, permiten establecer con



Foja: 1

certeza los ingresos brutos percibidos, o su eventual ausencia, durante el período delimitado en el considerando precedente.

Que, a este respecto, cabe precisar que si bien los testigos presentados por la parte demandada —cuyas declaraciones rolan a folio 34— afirmaron que el local habría permanecido cerrado entre marzo y octubre de 2021, lo cierto es que, para efectos de determinar los ingresos brutos y, por ende, las retribuciones adeudadas, debe estarse únicamente a los documentos tributarios y comerciales antes señalados, los cuales constituyen la única prueba idónea, suficiente y admisible para acreditar dichos ingresos.

En consecuencia, considerando además que la actora ha solicitado expresamente que la liquidación de los montos demandados se realice en la etapa de cumplimiento del fallo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 K de la Ley N° 17.336, se accederá a la demanda en cuanto al pago de la indemnización, reservándose su determinación para dicha etapa procesal, conforme a lo que la demandante solicite oportunamente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en lo relativo a los intereses solicitados, y sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato, corresponde tener presente que la indemnización de perjuicios ha sido establecida por esta sentencia, y su cuantía será determinada en la etapa de cumplimiento, conforme a lo solicitado expresamente por la parte demandante. En tal contexto, y atendido que la obligación sólo se perfecciona y torna exigible con la presente resolución, los intereses deberán calcularse desde que la sentencia quede firme o ejecutoriada, hasta la fecha en que se verifique su pago efectivo. **DÉCIMO OCTAVO:** Que, la parte demandante ha solicitado la aplicación de la multa prevista en el artículo 78 de la Ley N° 17.336, disposición que contempla una sanción de 5 a 50 unidades tributarias mensuales para aquellas infracciones a dicha ley y su reglamento que no se encuentren expresamente reguladas en los artículos 79 y siguientes.

De esta forma, teniendo en consideración que, conforme el artículo 67 de la Ley, “*El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su difusión por radio o televisión o en cualquiera otra forma de comunicación al público, estará obligado a pagar una retribución a los*



Foja: 1

artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas (...)”, y habiéndose configurado en la especie una infracción a dicha disposición por la falta de pago de las retribuciones correspondientes, corresponde aplicar la sanción contemplada en el artículo 78 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, valorando prudencialmente la entidad de la infracción, se accederá parcialmente a lo solicitado por la actora, condenándose a la demandada al pago de una multa ascendente a 10 unidades tributarias mensuales.

DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a las costas, cada parte soportará las propias en razón de no haber resultado la demandada totalmente vencida.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y lo dispuesto -además- en los artículos 1698, 1700, 1708 y 1709 del Código Civil; 139, 144, 160, 170, 254, 303, 342, 346, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1, 17, 18, 21, 67, 8, 79 y siguientes, 85 K, 91 y 100 de la Ley 17.336, y demás normas pertinentes, se declara:

I.- Que **SE RECHAZA** el incidente de previo y especial pronunciamiento promovido por la demandada a folio 9, conforme lo razonado en el motivo tercero.

II.- Que **SE RECHAZA** la excepción dilatoria de ineptitud del libelo opuesta por la demandada, conforme lo razonado en el motivo sexto.

III.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda de cumplimiento de contrato de folio 1, condenándose a la parte demandada al pago de las retribuciones acordadas equivalentes al 3.00% de los ingresos brutos mensuales del negocio, con la sola deducción del IVA, que se hubieren devengado entre abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, cuyo monto se determinará en la etapa de cumplimiento del fallo.

IV.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la pretensión de indemnización de perjuicios, condenándose a la parte demandada al pago de intereses corrientes calculados en la manera establecida en el motivo décimo séptimo.

V.- Que, **SE ACOGE PARCIALMENTE** la pretensión de condena al pago de multas, condenándose a la parte demandada al pago de una



C-2341-2023

Foja: 1

multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales, conforme lo razonado en el motivo décimo octavo.

VI.- Que **CADA PARTE** soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-2341-2023

Pronunciada por doña Lorena Isabel Cajas Villarroel, Jueza Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, catorce de abril de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LLUXTMDWZY